

Posición del Partido Comunista de España ante el Mercado Común Europeo

En el actual contexto mundial, la integración económica europea, el Mercado Común, ha afirmado la realidad de su existencia y está a punto de ampliarse con el ingreso de nuevos países. De este modo ha cristalizado un conjunto económico, sobre bases capitalistas monopolistas, que no es posible ignorar y que atrae, casi irresistiblemente, a otros países del continente entre los que se encuentra el nuestro.

El 50% de todo nuestro comercio se realiza con el M.C.E. Casi todas nuestras exportaciones agrícolas —90% de los agrrios, alrededor del 70% del conjunto— se venden en los países del M.C.E. Excusado es decir hasta qué punto nuestra economía está orientada a los países que le componen y lo difícil que resulta para ella prescindir del M.C.E. Y ello incluso independientemente del carácter del sistema social existente en España.

Al surgir, el Mercado Común aparecía como una creación política y económica del período de la guerra fría, como un bloque enderezado esencialmente contra la Unión Soviética y los países socialistas, del que la Alemania revanchista de Adenauer podía convertirse en cabeza dirigente. El M.C.E. actuaba como pieza auxiliar de la OTAN.

En el movimiento obrero y comunista se acogió esta integración con la reserva y hostilidad lógicas en aquellas circunstancias. De ahí la oposición al M.C.E.

Hay que decir, sin embargo, que el M.C.E. se ha creado y se está consolidando no exclusivamente como consecuencia de factores subjetivos, ligados al interés de los monopolios capitalistas. Existe en su base un factor objetivo que es la tendencia a la internacionalización de las fuerzas productivas, ley económica que opera tanto en el capitalismo como en el socialismo. Es esa misma ley la que está derribando muchas de las murallas levantadas por los gobernantes reaccionarios al comercio y a la cooperación económica con los países socialistas.

Con la superación de la política de guerra fría, el M.C.E. sufrió una cierta evolución. Fue perfilándose más como un área económica capitalista que defendía sus mercados con barreras aduaneras comunes y disputaba los mercados mundiales a sus competidores. El imperialismo norteamericano, mediante la exportación de capitales y tecnología, penetró en las empresas del M.C.E., participando en sus beneficios. Pero a la vez tropezó con la rivalidad y la competencia de estas empresas y con las medidas arancelarias del M.C.E. Al tiempo que se desarrollaba la interpenetración, crecía también la rivalidad. La luna de miel entre los EE.UU. y el M.C.E. ha atravesado y atraviesa crisis graves. Lo confirma el discurso de Nixon ante las asambleas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en el que se ataca duramente al M.C.E. Salvo cambios muy serios de la situación mundial, este aspecto de la rivalidad interimperialista deberá lógicamente acentuarse todavía más.

Hoy el M.C.E. es un hecho, una realidad. La posibilidad real de combatir el M.C.E., en tanto que superestructura monopolista, auxiliar de una política de dominación, reside esencialmente en conseguir cambiar el contenido de clase del Poder en los países que lo integran. Y los Partidos Comunistas de estos países se orientan más bien a impedir que se convierta en una Santa Alianza de los Estados capitalistas, a transformar sus estructuras, democratizándolas;

dichos Partidos conciben cada vez más el sentido de su acción no como un combate contra la integración económica europea en sí —por otro lado imposible de evitar— sino por una Europa democrática y socialista contra la Europa de los monopolios, y entretanto por la paz y la cooperación económica con los países socialistas, combate que se libra en cada país y también en escala europea.

En este combate se inserta la tendencia del movimiento obrero a articular la lucha de clases contra las empresas multinacionales a escala europea; los contactos y la colaboración de los obreros de una misma empresa en diversos países; las iniciativas, aún lentas y tímidas, para obtener una cooperación sindical en el continente; la necesidad de articular una cierta estrategia común de los Partidos Comunistas en Europa; de emprender una relación más activa con otros partidos y grupos de base obrera y popular a escala continental, particularmente con los Partidos Socialistas y la izquierda cristiana.

El desarrollo de esta tendencia a una articulación europea de la lucha de clases es la respuesta necesaria que exigen las nuevas realidades económicas. Desgraciadamente, se abre paso con mucha lentitud y cabe decir, a nuestro juicio, que la responsabilidad también corresponde en parte a los Partidos Comunistas que no mostramos suficiente agilidad frente a esos nuevos fenómenos y que aún no hemos introducido en el conjunto de nuestras relaciones internacionales formas concretas, específicas, bastante efectivas de cooperación al nivel europeo. En eso nos retrasamos en relación con los capitalistas.

Por otro lado, entre los problemas de la lucha frente a esta nueva situación se presenta aún con más fuerza —y sin que esté en contradicción con formas de articulación europea— la necesidad de que cada Partido elabore una estrategia revolucionaria capaz de transformar las estructuras político-sociales de su país, que como hemos dicho es el camino real para terminar con el carácter capitalista monopolista del M.C.E.

La posición de clase —confirmada por la experiencia de estos años— no consiste tanto en oponerse a la internacionalización cada vez mayor de las estructuras económicas, como en cambiar el régimen político-social de cada país, en armonizar la lucha obrera por encima de las fronteras europeas, en impedir la conversión del M.C.E. en una nueva *Santa Alianza* y en combatir toda discriminación de clase en el comercio y las relaciones con los países socialistas.

Desde su creación el M.C.E. ha provocado grandes discusiones en España. El régimen franquista, sin tener en cuenta el estado de la economía española, hizo en 1962 una demanda de admisión que fue recibida secamente. Las motivaciones del régimen eran fundamentalmente políticas. La economía española no se hallaba en condiciones de competir de igual a igual con las de los otros países del M.C.E.; en esa situación la integración hubiera significado la ruina

de la mayor parte de las empresas españolas, una subordinación completa de nuestro país. Pero el régimen esperaba de la integración, sobre todo, que el capitalismo europeo, alarmado por el contagio de una posible crisis revolucionaria en España, facilitase a Franco toda suerte de concesiones económicas y políticas. El complejo de ilegitimidad que ha aquejado al régimen, incluso en los momentos de mayor triunfalismo, creían poderlo superar logrando la bendición europea.

La realidad disipó estas ilusiones. Después de años de negociación, lo único que consiguió la dictadura fue un *acuerdo preferencial*, perjudicial para España y favorable para el M.C.E., como hoy advierte casi todo el mundo.

El M.C.E. lo hizo sabiendo que podría imponerle condiciones onerosas a un Gobierno que imploraba cualquier migaja de acuerdo para darse un aire de respetabilidad europea.

En aquel momento nuestro Partido se opuso a la integración inmediata por considerarla catastrófica para la economía nacional y, cuando se firmó, denunció el acuerdo preferencial, que perjudicaba los intereses españoles.

La entrada de nuevos países y muy particularmente de la Gran Bretaña en el M.C.E. ha venido a crear nuevas y mayores dificultades para el comercio exterior español, que se va a encontrar seriamente perjudicado por la ampliación de las barreras aduaneras del M.C.E. a sus nuevos miembros.

Esto ha exacerbado el interés de la burguesía española por lograr un acuerdo de asociación con el M.C.E. que le permita evitar las consecuencias perjudiciales para su comercio y que abra la vía a una progresiva integración.

Pero la burguesía sabe que cualquier acuerdo de asociación, con arreglo al Tratado de Roma, es incompatible con las estructuras fascistas del régimen y de ahí las presiones para que éste se decida a realizar una evolución; de ahí, entre otras razones, el neocentrismo.

Por su parte, el Gobierno se esfuerza por hacer ver que está en condiciones de gestionar ese acuerdo y los elementos más ultras aparentan menospreciarle dando a entender que España tiene otras posibilidades y no necesita que la acepten en el M.C.E.

La polémica entre ciertos sectores burgueses, ultras, centristas y demócratas puede, o bien llevar a gentes no informadas, y en relación con su tendencia política, a creer que el M.C.E. es una especie de panacea milagrosa para todos los males de España —que M.C.E. es igual a democracia—; o bien que el M.C.E. es la forma más segura de impedir o retrasar la revolución socialista.

Atribuir tantos vicios y virtudes —según los casos— al M.C.E. no tiene sentido. El M.C.E. es una realidad competitiva que nos rodea

de cerca y ante la cual hay que procurar echar los fundamentos de una política que defienda seriamente el interés nacional.

Partiendo del interés nacional, el Partido Comunista estima que *lo primero que necesita España es desembarazarse del régimen dictatorial. Que éste no tiene autoridad, ni fuerza, ni voluntad para llevar una negociación de cualquier tipo que sea frente al M.C.E., con garantías para los intereses nacionales. Que cualquier acuerdo que negocie la dictadura sería, como el acuerdo preferencial, nocivo.* Que además, en efecto, si se aplican las reglas del Tratado de Roma —y en el seno del M.C.E. hay fuerzas importantes que actuarán para que se apliquen— la dictadura está incapacitada para lograr ningún acuerdo de asociación. Y algunos retoques al actual acuerdo preferencial, que es lo que Ullastres trata de conseguir en Bruselas, no modificarían en nada la situación.

Lo más urgente, pues, es acabar con la dictadura y establecer un régimen democrático que pueda tratar con autoridad, haciéndose respetar, en nombre de España.

Creadas estas condiciones el Partido Comunista *se pronunciaría por un acuerdo de asociación con el M.C.E. que permitiera ir progresando en la cooperación con los países europeos a medida que las estructuras económicas del nuestro se renueven y alcancen la competitividad necesaria.* A nuestro juicio un Estado democrático tendría que realizar esta tarea de modernización *apoyándose preferentemente en el desarrollo del sector público de la economía.*

También consideramos un aspecto importantísimo de todo acuerdo que pudiera establecerse, en las condiciones dichas, con el M.C.E., la salvaguardia y defensa de los intereses de los trabajadores españoles emigrados en Europa, que hoy representan alrededor del 10% de la población activa española, y en tanto el desarrollo económico de nuestro país no traiga consigo su deseable reincorporación a España. A este respecto recordamos los planteamientos hechos por nuestro Partido en el mitin de Francfort, que condensan nuestros puntos de vista sobre los trascendentales problemas de la emigración.

El Partido Comunista y las fuerzas de progreso de España, en el caso de que tras la liquidación de la dictadura se llegue a un acuerdo de asociación con el M.C.E., unirían sus esfuerzos a los de los Partidos Comunistas y las fuerzas socialistas y progresistas europeas que se propongan democratizar el M.C.E. y transformar la Europa de los monopolios en una Europa socialista.

En definitiva, *el M.C.E. no es hoy un problema que pueda dividir y enfrentar entre sí a las fuerzas democráticas de nuestro país, que estorbe la búsqueda de un acuerdo para acabar con la dictadura.*

La solución más conveniente para el país al problema de los mercados europeos y de la cooperación económica con Europa no está en manos de la dictadura franquista, ni en las del centrismo, sino

en la articulación de la alternativa democrática, en el pacto para la libertad que propugna el Partido Comunista. Un Gobierno democrático nacional fuerte, con un amplio respaldo popular, es urgentemente necesario para tratar con el M.C.E. hoy y a todo lo largo de cualquier acuerdo de asociación. No hay que olvidar que el M.C.E. es una institución capitalista, con la que tenemos que tratar, pero en la que cada medida a discutir será una verdadera batalla para defender los intereses nacionales frente a los de los otros países capitalistas. Así es como hay que ver al M.C.E. y como hay que tratar con él.

Un Gobierno auténticamente democrático podría ir a la asociación con el M.C.E., diversificando a la vez el comercio exterior y ampliando considerablemente las relaciones económicas con los países socialistas y con el *tercer mundo.*

Sobre el mercado común europeo

JUAN GOMEZ

Ha surgido en la discusión, como no podía ser de otra manera, el problema del Mercado Común. En el informe del Comité Central, presentado por el camarada Santiago Carrillo, se plantea un nuevo enfoque de esta cuestión que tiene, no sólo gran importancia táctica, sino también implicaciones estratégicas. La discusión demuestra cómo la elaboración de la política del Partido se hace con la participación reflexiva, crítica, enriquecedora de las organizaciones y de los militantes; nos está armando, nos está preparando para la gran discusión, para el debate ideológico que tenemos que librar cada día con mayor intensidad, con argumentación sólida sobre éste, como sobre los demás problemas ligados a nuestra concepción del proceso revolucionario en las condiciones de nuestro país.

Yo voy a dar también brevemente mi opinión, con la premura que a todos nos impone el inexorable horario del Congreso, pero anunciándoos ya que compartimos vuestra preocupación sobre la necesidad de poner a disposición del Partido una base de análisis, con datos y con hechos, tarea a la que nos estamos dedicando.

Creo que el fondo de la cuestión, que se pone de manifiesto en las intervenciones de los camaradas que han abordado el tema y que, sin duda, preocupa al conjunto de los camaradas aunque las suyas las hayan centrado en otras cuestiones, podría ser formulado en los términos en que ya lo planteaba un camarada de Madrid, en su intervención en la sesión nocturna de anoche:

¿Qué incidencias, qué repercusiones, qué consecuencias *ván a tener sobre el problema capital de las dos vías*: la vía del capital monopolista, del neo-capitalismo y la vía revolucionaria de la democracia político-social, la posición que hoy tomamos en relación con el proceso de integración económica que ha cristalizado en Europa?

He ahí el fondo de la cuestión. Todos los aspectos de la problemática, de la actitud a tomar ante la integración europea, que son muchos, que son graves, que son contradictorios, hemos de examinarlos —¡ cómo no!—, pero como aspectos parciales, subordinados a la cuestión fundamental.

Uno de los camaradas que más atención ha prestado en su intervención a este tema nos hablaba de la necesidad de jerarquizar los problemas. Nada es más cierto. Señalaba que hay que partir del análisis de la realidad económica; de la estructura y de la superestructura, de los retrasos acumulados, de las deformaciones que son el fruto de los rasgos específicos de nuestras clases dominantes, de nuestra oligarquía bicéfala, financiero-terrateniente; de los nuevos problemas, de las nuevas deformaciones, de las nuevas contradicciones que han surgido o han venido a acumularse en el decenio del sesenta, de intenso crecimiento económico; de la concreción de todo ello en nuestro retraso relativo acentuado con Europa; en la nueva e intensa penetración del capital extranjero con niveles de dominación, de subordinación, que llegan a ser coloniales en algunos aspectos trascendentales, como el de la investigación científica.

Quiero decir que el grado de identificación entre los argumentos utilizados por el camarada y el trabajo sobre "Elementos de análisis para el estudio de la estructura económica de España" que está en curso de elaboración, habría que calificarlo de sorprendente, si no fuera fruto de la profunda compenetración que existe en el Partido sobre estos problemas.

Ahora bien, ¿ es que el Partido, al hacer el nuevo enfoque de la problemática de España frente a la integración europea, ignora, subestima o descuida esta jerarquización?

Evidentemente, no. *Toda la política del Partido* es elaborada —¿ y cómo podría ser de otra manera tratándose de un Partido marxista?— partiendo de este análisis.

Si no fuera así, hace tiempo que habríamos sucumbido a las solicitaciones de los que pretendían o pretenden que el capital monopolista español, con el sistema de capitalismo monopolista de Estado, está ya en condiciones de abordar y resolver los problemas y las deformaciones acumuladas en el proceso de desarrollo histórico-social, tanto en la agricultura como en la industria, los servicios y la superestructura; de absorber las tensiones que todo ello provoca y que los cambios acentúan; hace tiempo que nos habríamos subido al tren, pospuesto la perspectiva revolucionaria y elaborado una estrategia para la marcha hacia el socialismo en España en concordancia con las exigencias de un país auténtica y normalmente desarrollado.

Si no fuera así, toda la táctica y la estrategia que el Partido viene elaborando carecería de base, estaría en el aire; no hubiera cimentado la profunda unidad que hoy existe en el Partido; no tendría la acogida que tiene en nuestra clase obrera, en las fuerzas revolucio-

narias y progresivas de nuestro país; ni el impacto que produce en la política de España.

Todo ello es tan evidente para todo el Partido, que no es preciso detenerse en subrayarlo.

Ahora bien, la profunda convicción que tenemos de que la vía democrática revolucionaria terminará imponiéndose en España es una convicción científica, nacida de ese análisis jerarquizado a que se refería el camarada, pero no es ninguna convicción determinista; el dilema entre la vía democrática y la oligárquica no está ya resuelto, ni lo estará en ninguna de las fases intermedias, y sólo se resolverá como culminación de una áspera y dura lucha, en la que lo esencial es la acumulación de fuerzas; ir cambiando progresivamente la correlación entre las fuerzas que gravitan en favor de la continuación de la vía oligárquica y las fuerzas capaces de imponer el cambio. Tal es el problema decisivo y ello está claro para todos.

Pero esto exige, impone al Partido la necesidad de ceñir cada día más de cerca la realidad del país; de estar atentos a los cambios que se producen en la situación; de enfrentarse con audacia con los nuevos problemas, poniendo a contribución todas las fuerzas del Partido para acertar, para no equivocarnos; porque un error ante un problema de envergadura puede tener consecuencias incalculables.

Uno de esos momentos en que tenemos que enfrentarnos audazmente con una nueva situación y acertar en su enfoque, es el creado a nuestro país por la integración económica de la Europa capitalista.

El camarada Carrillo, en su informe, ha señalado los grandes rasgos del proceso de integración económica capitalista que tiene lugar en Europa, la doble dinámica que le anima; de un lado, como baluarte imperialista contra el reto del sistema socialista y la amenaza de la revolución y, de otro, como entidad regional de un grupo de Estados altamente desarrollados que, utilizando el capitalismo monopolista de Estado, el establecimiento de una barrera exterior común, buscan la forma de aumentar su peso en la competencia internacional. Las agrupaciones regionales monopolistas constituyen hoy el cauce principal por el que se vierten las contradicciones interimperialistas, en un mundo en el cual el recurso a la guerra para redistribuirse los mercados constituye un medio demasiado peligroso y arriesgado.

La integración, se ha señalado, cabalga sobre la corriente objetiva de la internacionalización de las fuerzas productivas. De ahí, su fuerza; de ahí que, venciendo no pocos obstáculos, nacidos fundamentalmente de las contradicciones existentes entre los propios países integrantes, se abra camino, consiguiendo resultados importantes, *desde el punto de vista de los objetivos y los intereses de las oligarquías.*

Pero este cabalgar sobre la tendencia objetiva a la internacionalización de las fuerzas productivas y de los mercados, no se realiza globalmente, a escala verdaderamente internacional. En ella in-

terfiere el carácter regional de las integraciones, al dotarse de una tarifa exterior común.

Los problemas que dimanarían de la internacionalización de las fuerzas productivas y los mercados, de lo que podríamos llamar el nivel histórico, afectan a todos los países y cada país tiene que hacer frente a sus consecuencias. Son problemas específicos que cada país ha de ventilar enfrentándose con las cuestiones de su estructura y de su desarrollo económico.

Pero la integración regional capitalista hace intervenir otro nivel de consecuencias. La tarifa exterior común institucionaliza una discriminación hacia terceros países. Así, los problemas inherentes a la integración regional capitalista no afectan sólo a los países en ella englobados; *afectan, y de forma muy directa y decisiva, a los terceros países, ante todo a los que se hallan situados, geográfica e históricamente, en su zona de influencia.*

No verlo así, significa cerrar los ojos. Hacer planteamientos abstractos sobre la superioridad que representaría el que la internacionalización de las fuerzas productivas se realizase a escala realmente global, sin discriminaciones entre zonas, ni contra terceros, no pasa de ser eso: planteamientos abstractos, sin ninguna conexión con la realidad objetiva y con el discurrir histórico.

Esto es lo que ha pasado en Europa, en el proceso de todos conocido. Proceso que se ha acelerado y agravado en sus efectos para nosotros, cuando cuatro países de la antigua Asociación Europea de Libre-Cambio: Inglaterra, que tiene una importancia primordial para nuestra exportación agraria, Irlanda, Dinamarca y Noruega firmaron el acuerdo de incorporación al núcleo original del Mercado Común y cuando, hace unas semanas, los seis países restantes de la Asociación—Suiza, Suecia, Portugal, Austria, Finlandia e Islandia— han constituido con el Mercado Común una zona de libre comercio. Últimamente Noruega, en ejercicio de sus libertades democráticas, se ha pronunciado en un referéndum contra la plena integración; pero no hay que olvidar que ese país continúa formando parte de la Asociación Europea de Libre-Cambio y que, en calidad de tal, renegociará con los nueve de la CEE su participación en la zona de libre comercio.

Recordando que Grecia y Turquía estaban ya asociadas al Mercado Común, el único país de toda la Europa capitalista que queda marginado es España.

Si a ello se añade que los países del Norte de África, Marruecos y Túnez, se hallan ya asociados en condiciones muy ventajosas en relación con España; que Argelia, que ya disfruta de ciertas ventajas, está negociando su ampliación; que los países africanos, antiguas colonias de Francia y, en adelante, los países del Commonwealth están entroncados con la Comunidad, podrá medirse el alcance de nuestro aislamiento.

Las consecuencias para España hay que calibrarlas, no sólo —y yo diría, no tanto— por los mayores obstáculos que van a encontrar nuestras exportaciones, sino por las ventajas y preferencias que van a recibir los países que son nuestros más directos competidores.

No hay tiempo aquí para entrar en detalles. Digamos, a título de ejemplo: cuando a Portugal se le conceden ventajas sustanciales para sus exportaciones de patata temprana, vinos, corcho, sardinas, confección de prendas de vestir, etc. y se le otorga, además de la rebaja arancelaria, un cupo de 70.000 toneladas de concentrado de tomate, ¿qué golpe no reciben esos sectores de nuestra producción agraria e industrial?

Ante problema de tal trascendencia, ¿cómo imaginarse que puede callar el Partido? ¿Cómo eludir el tomar una posición que sea, al mismo tiempo, realista, articulada y convincente?

Antes de pasar adelante, yo querría decir con toda fuerza que nosotros ni desconocemos, ni embellecemos el carácter del Mercado Común. Se trata de una asociación regional de Estados monopolistas, el cogollo del imperialismo europeo. Ninguna tibieza al hacer esta afirmación, que debemos repetir siempre que en la polémica abordemos el problema.

El resultado del referéndum en Noruega, la amplia oposición a la plena integración en Dinamarca y en la propia Inglaterra demuestran que son muchas las fuerzas que no se dejan obnubilar sobre dicho carácter por los cantos de sirena de los europeístas. Entre nosotros, el 10% de la población activa emigrada en los países de la CEE testimonian, a través de la explotación despiadada a que se ve sometida, del contenido de clase de la Europa comunitaria.

Pero, de la misma manera que no podemos abandonar España porque ésta está dominada por la oligarquía y gobernada por la dictadura, no podemos volver la espalda a Europa porque ésta esté dominada por el Mercado Común de los Estados monopolistas.

Contra una y otra realidad, lo decisivo es la lucha, y lo importante acertar en cómo librarla, para cambiarla mejor y más rápidamente.

¿Es que tenemos a nuestro alcance alguna solución de recambio?

En primer lugar, la España de hoy no es la España de antes de la guerra, ni siquiera la de hace dos decenios. Antes podíamos sobrevivir y vegetar en la autarquía; hoy, la dependencia de nuestra economía del sector exterior es, no ya importante, sino determinante.

Sin entrar aquí en los pormenores del cómo ni el por qué, lo cierto es que nuestras importaciones se elevan actualmente a más de cinco mil millones de dólares.

Y esas importaciones —precisamente por el tipo de desarrollo que hemos conocido en el último decenio—, tienen una rigidez estructural muy peligrosa y muy acentuada.

Productos alimenticios, combustibles líquidos, materias primas, productos intermedios, que sirven para que marche nuestra industria transformadora, y bienes de equipo, representan el 93% de nuestras importaciones. Para los bienes de consumo sólo queda un reducido 7%.

Ello quiere decir que cualquier tropiezo, cualquier desfallecimiento del sector exterior, afecta rápida y profundamente a todo nuestro mecanismo económico.

Podemos lamentarlo y debemos denunciarlo; pero hasta hoy, es un hecho y, pese a su gravedad, no hemos podido reunir las fuerzas necesarias para empezar a cambiarlo.

Nuestro mercado fundamental es Europa; lo es, ante todo, para los productos agrícolas, que pese a los cantos triunfalistas de los desarrollistas, son y continuarán siendo durante largo tiempo pivote esencial de nuestra exportación. De ella depende la situación de una serie de sectores y de zonas con los que trabaja parte no despreciable de nuestra población activa.

Cambiar las corrientes comerciales creadas por la situación geográfica y el desarrollo histórico, es tarea difícil y de largo alcance. Todo cambio brusco, todo corte de las relaciones comerciales tradicionales, produce traumas económicos que están en la memoria de todos. Diversificar los mercados es un objetivo justo, altamente deseable. Cambiar bruscamente las corrientes comerciales tradicionales es una catástrofe, que sólo puede examinarse como una incidencia de un proceso revolucionario agudo y no porque nosotros la busquemos, sino porque nos fuere impuesta.

Con la democracia, en el período de democracia político-social, e, incluso en el socialismo, los mercados de la que es hoy la Europa capitalista seguirán siendo esenciales para nuestro país y debemos esforzarnos por conservarlos, si no queremos añadir a todos los problemas con que ya tendremos que enfrentarnos, otros muchos que serían muy graves.

Si todo esto es así, como en sus líneas generales reconoce en su argumentación el camarada, lo que constituye una inconsecuencia, por no decir una contradicción, es la sugerencia que creo implícita en sus palabras, de que aplacemos nuestra toma de posición hasta haber realizado las transformaciones estructurales que él, con tanto acierto, señalaba necesita España.

En esta posición, como en la de otros camaradas que dicen que nada nos obliga a precipitarnos, yo creo que se refleja tanto la pro-

ocupación legítima a que yo me refería al principio de mi intervención sobre la incidencia que ello puede tener en nuestro proceso revolucionario autónomo, como también, por qué no decirlo, cierta actitud defensiva ante la necesidad en que vamos a encontrarnos de explicar, de hacer frente a las acusaciones de revisionismo, de oportunismo, que no han de faltar por parte de ciertos grupos y corrientes llamadas izquierdistas.

El debate ideológico que habremos de librar en defensa de la posición que tomamos es el mismo que ya venimos librando en defensa de nuestra concepción del Pacto para la Libertad.

La Europa integrada, hoy por hoy, es en lo esencial: una unión aduanera total para los productos industriales, dotada de una tarifa exterior común y una ordenación y reglamentación de la producción y los mercados agrarios acentuadamente autárquica, proteccionista y ferozmente discriminatoria contra los terceros países.

Es esta Europa integrada, tal como es hoy, la que —como hemos señalado— nos crea una situación que nos obliga a tomar posición, a ajustar el punte de mira de nuestra política.

La Europa supranacional, el gobierno europeo, incluso un Parlamento con facultades legislativas supranacionales de entidad, son por ahora, simples proyectos, objetivos declamados que no están en el horizonte visible, que no hay por qué tomar en consideración al hacer una valoración del problema en la etapa presente; que, en todo caso, encontrará en nosotros, en los Partidos Comunistas de Europa y en otras fuerzas revolucionarias, la otra opción, la única realmente en concordancia con el desarrollo y la internacionalización de las fuerzas productivas: la Europa socialista.

El Mercado Común no impidió que Francia, miembro de pleno derecho desde hacía diez años, conociera las jornadas de Mayo y Junio de 1968, que si no tuvieron otro desenlace, no fue ciertamente por la existencia de la Comunidad. Tampoco ha impedido la conclusión del Pacto entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, ni interfiere en la dinámica autónoma de este Pacto.

Como no ha impedido el "otoño caliente" italiano, los progresos de la unidad sindical, la crisis del centro-izquierda.

No, el proceso autónomo de cada país, en Europa, se decide en función de las contradicciones internas, de la lucha de clases, de la lucha política.

El soporte de los imperialistas a nuestra oligarquía, como los obstáculos que pueden levantar frente a la voluntad de nuestro pueblo, se producen en el marco de la contradicción fundamental del mundo contemporáneo, con todos los condicionantes que estos problemas representan; pero, en todo caso, no en función de estar o no asociado al Mercado Común.

Por otra parte, en la posición que hoy toma el Partido no existe ninguna ambigüedad; ni en cuanto al carácter oligárquico, imperialista, del Mercado Común, ni tampoco en cuanto a la responsabilidad histórica de nuestra oligarquía.

Responsabilidad por la situación con que, al enfrentarse con el reto objetivo que representa la integración europea, España se encuentra en cuanto a nivel de desarrollo y grado de competitividad.

Responsabilidad por estos diez últimos años perdidos, sin haber progresado un paso en la disminución del desnivel relativo.

Responsabilidad porque, secuestrando por la violencia los destinos de España, coloca a ésta en la situación de que, ni puede permanecer al margen, ni puede negociar con el Mercado Común. Y cuando firma un acuerdo comercial preferencial, lo hace en tales condiciones de inferioridad, de abandono de la soberanía, que hoy ni ellos mismos pueden defenderlo ni considerarlo viable.

Por eso partimos, al formular nuestra posición, de la afirmación inequívoca de que lo primero que necesita España es desembarazarse del régimen franquista, restaurar la democracia.

Y, a continuación, decimos al país, con toda claridad, que para defender los intereses de España, en las condiciones tan difíciles a que nos vemos abocados, necesitaremos un gobierno democrático, fuerte, con sólido respaldo popular, que avance procediendo a los necesarios cambios de estructura, apoyándose en un poderoso sector público de la economía.

¿Dónde está la ambigüedad? ¿Qué hay en todo ello que pueda atarnos las manos en la defensa de los intereses de la clase obrera, de los campesinos, de las capas medias, de los intereses nacionales del país?

Veamos, por el contrario, qué pasaría si nos inhibiéramos, si no tomásemos posición.

De hecho, apareceríamos en una extraña compañía con Blas Piñar y otros ultras; pero no es eso lo más importante, sino que objetivamente realizaríamos una opción en favor de la autarquía.

Y entonces, todas las dificultades, todos los obstáculos que encontrarán inevitablemente el uno o el otro sector; todos los expedientes de crisis, todos los despidos que van a producirse en el país de todas maneras, inexorablemente, en tanto no se resuelvan los auténticos problemas básicos de nuestra economía, nos serán imputados a nosotros; voces gozosas, desde muchos ángulos políticos, se levantarán, apuntando con el dedo al Partido Comunista como responsable, por lo que ellos calificarán de posición retrógrada.

La oligarquía se frotaría las manos. Habríamos prestado un servicio inestimable a la maniobra neo-centrista. Toda la labor tan com-

pleja, todo el esfuerzo que venimos realizando —y a lo que el Congreso ha prestado justamente tanta importancia— para derrotar al neo-centrismo, para atraer a las fuerzas susceptibles de ser influenciadas por éste hacia la alternativa democrática, se vería comprometido; se facilitaría la formación de una coalición que iría desde la derecha reaccionaria hasta los socialdemócratas, demócratas cristianos y otras fuerzas liberales, bajo la bandera del europeísmo.

En el Informe del Comité Central, el análisis sobre el neo-centrismo y la forma de contrarrestarlo y la posición que se propone ante la integración europea, forman un todo estructurado. Otra actitud sobre este problema minaría toda nuestra lucha para impedir la maniobra neo-centrista.

Vistas así las cosas, ¿es que pueden quedar dudas de si ello nos acerca o nos aleja, no sólo de la libertad, sino también de la democracia político-social y del socialismo?